

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO CINCUENTA Y NUEVE (59) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO  
JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.  
- SECCIÓN TERCERA -

Bogotá, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

<b>Medio de Control:</b>	REPARACIÓN DIRECTA
<b>Radicación:</b>	11001 33 43 059 <b>2022 00358 00</b>
<b>Demandantes:</b>	MANUEL ANTONIO GONZÁLEZ HENRÍQUEZ Y OTRO
<b>Demandados:</b>	NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
<b>Asunto:</b>	Admite demanda
<b>Entrada:</b>	Carpeta Subsanaadas
<b>Enlace:</b>	<a href="https://www.caj59.gov.co/consultas/11001334305920220035800">11001334305920220035800 (P)</a>

I. ASUNTO A TRATAR

Procede el Despacho a estudiar sobre la admisión de la demanda que en ejercicio del medio de control de Reparación Directa instauró mediante apoderado judicial los señores **MANUEL ANTONIO GONZÁLEZ HENRÍQUEZ, LEONOR SOFIA PERDOMO DE GONZÁLEZ, LEONOR ELISA GONZÁLEZ PERDOMO; GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ PERDOMO** este último actuando en nombre propio y en representación de su menor hijo **JERÓNIMO GONZÁLEZ BLANCO**; así como **CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ** esta última actuando en nombre propio y en representación de su menor hija **CLAUDIA JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ**; igualmente comparece **CARLOS MARTIN GONZÁLEZ HENRÍQUEZ, AMINTA DOLORES GONZÁLEZ HENRÍQUEZ, ELISA GONZÁLEZ DE SOLANO, BETTY DOLORES GONZÁLEZ DE MIER, DANIELA FEO GONZÁLEZ, LUZ KARINNE GONZÁLEZ JULIO, SANDRA KATERINE GONZÁLEZ JULIO, JUAN MANUEL BAUTISTA GONZÁLEZ, ELISA ELVIRA SOLANO GONZÁLEZ, DIANA MARGARITA SOLANO GONZÁLEZ, ELISA LUCIA MIER GONZÁLEZ** esta última actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijos **SAMUEL ALEJANDRO ATENCIO MIER y GABRIEL ELÍAS ATENCIO MIER**; y los señores **HERNANDO FEO ROJAS, LINA MARÍA BLANCO DE GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ FRANCO, RUBY CECILIA JULIO BARROS, BLADIMIR ATENCIO PEÑARANDA** en contra de la **NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**, por la presunta privación injusta de la libertad a la que fue sometido.

II. CONSIDERACIONES

***PRESUPUESTOS PROCESALES***

***Jurisdicción y competencia***

Esta Jurisdicción es competente para conocer acerca del presente asunto, toda vez que dos de las demandadas son entidades públicas en los términos del parágrafo del artículo 104 del CPACA, sumado a que el tipo de indemnización que se pretende es de carácter patrimonial enmarcada dentro de la fuente de obligaciones extracontractual, según lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 104 de la Ley 1437 del 2011, el cual contempla:

***“Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.***

*Igualmente conocerá de los siguientes procesos:*

***1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable.”***

### **Competencia por el factor territorial**

Por otro lado, el artículo 156 del CPACA, regula el punto específico de la competencia por el factor territorio, aquella disposición determina que:

***“Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:***  
*(...)*

***6. En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante. Cuando alguno de los demandantes haya sido víctima de desplazamiento forzado de aquel lugar, y así lo acredite, podrá presentar la demanda en su actual domicilio o en la sede principal de la entidad demandada elección de la parte actora.”***

El apoderado de la parte actora, señaló en su escrito de la demanda, que al ser la ciudad de Bogotá la Sede Principal de las demandadas, radicaría la demanda en éste circuito; evento que se encuentra contemplado en la norma antes descrita, por lo que se concluye que esta judicatura si cuenta con competencia por el factor territorial para conocer este proceso.

### **Competencia por el factor cuantía**

El artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, reglamenta lo concerniente a la competencia por el factor cuantía. Al respecto precisa:

***“Artículo 157. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se***

*establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.*

*Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.”*  
(Subrayado fuera de texto)

Del mismo modo, la competencia para los jueces administrativos está dada en numeral 6° del artículo 155 del CPACA, disposición que establece:

*“Artículo 155. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:*

*(...)*

*6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

En el caso que nos ocupa, y según lo considerado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la cuantía asciende por concepto de perjuicios materiales \$40.000.000, suma que no supera los 1000 SMLMV a que alude el precitado artículo 155 del CPACA, por lo que es claro que la competencia por la cuantía corresponde a este Despacho, en primera instancia.

### **Caducidad del medio de control**

La finalidad de la caducidad es racionalizar el ejercicio del derecho de acción, lo que impone al interesado la obligación de ejercerlo oportunamente, so pena de que las situaciones adquieran firmeza y que se extinga la jurisdicción del juez de lo contencioso administrativo para estudiarlas. Lo anterior, a efectos de evitar la incertidumbre que provocaría la facultad irrestricta de ventilar las controversias que se presentan en sociedad ante la jurisdicción en cualquier momento, que además sería atentatorio del principio de seguridad jurídica.

Es así que el literal i) numeral 2° del artículo 164 del CPACA establece el plazo oportuno para presentar la demanda de reparación directa que será de “*dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.*”

De acuerdo con los criterios señalados se pasa a hacer el conteo del término de caducidad para este asunto. Se tomará en cuenta el día siguiente en que quedó ejecutoriada la sentencia penal que absolvió al señor **MANUEL ANTONIO GONZÁLEZ HENRÍQUEZ**, esto es, el día 8 de junio de 2020.

En virtud de lo anterior, si en gracia discusión no se tuviera la suspensión de términos generada por la contingencia sanitaria que señaló en el artículo 1° del Decreto 564 de 2020, ni la suspensión por el trámite de conciliación extrajudicial, el término máximo para presentar la demanda sería el día **9 de junio de 2022.**

Sin embargo el Gobierno Nacional, debido a la contingencia sanitaria que se presenta en la actualidad debido a la propagación de la COVID-19, señaló en el artículo 1° del Decreto 564 de 2020, que los términos de caducidad estarían suspendidos a partir del 16 de marzo de 2020, y hasta el 1° de julio del mismo año –fecha esta última establecida por el Consejo Superior de la Judicatura, para el cese de la suspensión.

Así las cosas, en el presente asunto se suspendió el término de la caducidad en dos eventos a saber: El primer lapso por 3 meses y 10 días de conformidad con el Decreto 564 de 2020, arrojando como fecha nueva para demandar el **19 de septiembre de 2022**. El segundo lapso, contados desde el 18 de diciembre de 2020 día en el cual se radicó solicitud de conciliación prejudicial hasta el **14 de abril de 2021**.

Por lo tanto, teniendo en cuenta las dos suspensiones antes descritas y como quiera que la demanda fue interpuesta el **08 de septiembre de 2022** (ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca), misma fecha en la que se realizó la conciliación extrajudicial, se entiende que se realizó dentro de la oportunidad legal, por lo que se cumple con el presupuesto de la oportunidad de la pretensión.

### **Legitimación en la causa para actuar**

Entendida la legitimación en la causa como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial.

La legitimación ha sido **clasificada en legitimación de hecho y material**, la primera de ellas referida al interés conveniente y proporcionado del que se da muestra al inicio del proceso, la segunda objeto de prueba y que le otorgará al actor la posibilidad de salir adelante en las pretensiones solicitadas, previo análisis de otras condiciones.

Sobre este punto ha expuesto el H. Consejo de Estado:

*“(…) Varios y reiterados han sido los pronunciamientos de la Sección Tercera tendientes a diferenciar los dos aspectos medulares de la figura de la legitimación en la causa. Así ha dicho que en la reparación directa, la legitimación en la causa está dada por la condición de damnificado del demandante, hablándose de legitimación de hecho, originada en la simple alegación de esa calidad en la demanda, como lo prevé el artículo 86 del C. C. A., al señalar “la persona interesada podrá”, siendo entonces ese interés mínimo, suficiente para accionar y para proponerlo en la instancia procesal de inicio del juicio, en contraste con el presupuesto de sentencia favorable de las pretensiones que constituye la legitimación material, la cual se desprende de la prueba efectiva de la condición de damnificado, que le permitirá a quien demandó obtener, con la satisfacción de otros supuestos, la favorabilidad de las pretensiones. Puede ocurrir entonces que la afirmación de hecho en la demanda y a términos del artículo 86 del C. C. A, de que la parte demandante se crea “interesada” (legitimación de hecho en la*

*causa) no resulte cierta en el proceso, y por lo tanto no demuestre su legitimación material en la causa (...)*<sup>1</sup>

Conforme a lo anterior, se tiene que la legitimación en la causa por activa, se encuentra acreditada pues quienes hoy funge como demandante es la víctima directa, a quien según las demandas se le causó un daño antijurídico ocasionado por la actividad prejudicial y judicial, evento que lo legitima en la causa por activa para proponer el presente medio de control.

De otro lado, frente a la legitimación en la causa por pasiva, las demandadas han sido a quien el actor ha imputado la responsabilidad por los presuntos daños que se le han ocasionado, por ende, se encuentra legitimada en la causa por pasiva para concurrir a este proceso.

### **Representación judicial**

El numeral 4 del artículo 133 del Código General del Proceso, al cual hace remisión expresa el artículo 208 del CPACA, establece como causal de nulidad “*Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder*”.

Estudiado el contenido del expediente se observa que los aquí demandantes, confirieron poder para que los representaran en este proceso al profesional del derecho **ANGELO SCHIAVENATO RIVADENEIRA**, quien cuenta con derecho de postulación por su condición de abogado titulado e inscrito ante el Registro Nacional de Abogados, con tarjeta profesional vigente y sin sanciones o limitaciones al ejercicio de la carrera<sup>2</sup>.

### **Conciliación extrajudicial**

Respecto a este tópico se encuentra acreditado el requisito que impone el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, con el certificado emitido por la Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos. De este modo es claro que el extremo demandante puede acudir a esta jurisdicción.

## **REQUISITOS FORMALES DE LA DEMANDA**

Por último, se advierte que están acreditados los presupuestos procesales para formular la presente demanda, además de la lectura del escrito de demanda, emerge claro para esta judicatura que cumple con los requisitos formales que establece el artículo 162 del CPACA, así como los demás establecidos en la ley, tal como se ilustró en la parte considerativa de este proveído, razón por la cual se admitirá la demanda.

---

<sup>1</sup> Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez - Bogotá, D.C. 10 De Agosto De 2005 - Radicación Número: 44001-23-31-000-1994-03444-01(13444)

<sup>2</sup> Esto se concluye por consulta digital que se hizo en la página web de la Rama Judicial en el link: <http://antecedentesdisciplinarios.ramajudicial.gov.co/Default.aspx> y <https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx>

Considerando lo anterior, el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá,

### RESUELVE:

**PRIMERO: ADMITIR** la demanda promovida a través de abogado por los señores **MANUEL ANTONIO GONZÁLEZ HENRÍQUEZ y otros ciudadanos**, en contra de la **NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Por Secretaría, **NOTIFICAR** personalmente la presente admisión de demanda al Representante Legal y/o quien haga sus veces de: i) **NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y ii) FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**. Ello en la forma establecida en los artículos 197 al 201 del CPACA

Es de advertir que la notificación se entenderá surtida, con el envío correspondiente a la dirección de correo electrónico, para notificaciones judiciales.

**TERCERO:** Para efectos de notificación, téngase en cuenta los siguientes correos:

- De la parte actora:
- [schiavenato.angelo@gmail.com](mailto:schiavenato.angelo@gmail.com)
- [angelo.schiavenato@smabogados.com.co](mailto:angelo.schiavenato@smabogados.com.co)

De los demandados:

[deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co](mailto:deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co)  
[jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co](mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co)  
[jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co](mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co)  
[notifdeaj@deaj.ramajudicial.gov.co](mailto:notifdeaj@deaj.ramajudicial.gov.co)  
[deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co](mailto:deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co)

**CUARTO: NOTIFICAR** personalmente esta providencia al agente del Ministerio Público delegado para este juzgado, al representante legal de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y/ o a quien estos hayan delegado para recibir notificaciones, tal como lo señala el artículo 199 de la ley 1437 de 2011, para que ejerza las funciones previstas en la Ley.

**QUINTO: CORRER** traslado, igualmente en los términos del artículo 172 del CPACA, al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a las demandadas en este proceso por un plazo de **treinta (30) días**, dentro del cual, deberán contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía, y/o presentar demanda de reconvenición.

Se advierte que dicho término se contabilizará al vencimiento de los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje como refiere el artículo 48 del decreto 2080 de 2021.

**SEXTO: ADVERTIR** a las demandadas que conforme a lo dispuesto por el numeral 4° y párrafo 1° del artículo 175 del CPACA, deberá allegar con la contestación de la

demanda todas las pruebas que pretendan hacer valer y que reposen en su poder, adviértase también que conforme dispone el artículo 78 numeral 10º del CGP, es su deber abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir. Además de que según el artículo 173 mismo estatuto de no hacerlo el juez se abstendrá de ordenar su decreto, salvo que la parte hubiera presentado petición para ello y no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.

**SÉPTIMO: RECONOCER** personería al abogado **ANGELO SCHIAVENATO RIVADENEIRA**, como apoderado de la parte actora, en los términos y para los fines de los mandatos

**OCTAVO: REQUERIR** al apoderado de la parte actora, para que en el término de **DOS (2) DÍAS**, dé cumplimiento a lo consagrado en el numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021.

Surtido lo anterior, ingrese el expediente al Despacho para tomar las decisiones que en derecho correspondan

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**HERNÁN DARÍO GUZMÁN MORALES |**  
**JUEZ**

<p>JUZGADO CINCUENTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN TERCERA</p> <p>Por anotación en el estado No. <b>21</b> de fecha <b>16 de junio de 2023</b> fue notificado el auto anterior. Fijado a las 8:00 A.M.</p> <p>   <b>GLADYS RÓCIO HURTADO SUÁREZ</b>            SECRETARIA         </p> <p>  </p>
--

